



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Servei de Recursos Humans (PTGAS)

PRIMER EXERCICI

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL
GRUP A, SUBGRUP A1, DE LA ESCALA
TÉCNICA DE GESTIÓN, PROMOCIÓN
INTERNA**

21 de febrero de 2025



- 1) Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente se entiende como:**
 - a) Sistema internet.
 - b) Sitio web.
 - c) Actuación administrativa electrónica.
 - d) Portal de internet.
- 2) Según el art.45 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado:**
 - a) Si no utiliza sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado.
 - b) Si utiliza sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado.
 - c) Obligatoriamente deberá utilizar sistemas de firma electrónica basados en certificado electrónico reconocido o cualificado.
 - d) Los sellos electrónicos no se superponen, incluso si se trata de sellos basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados.
- 3) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no será de aplicación:**
 - a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de Protección de Datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo.
 - b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el art. 3.
 - c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
 - d) Todas son correctas.



- 4) **Al ejercer el derecho de rectificación, el afectado deberá indicar en su solicitud, conforme al art. 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:**
- Únicamente la corrección que haya de realizarse.
 - A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse.
 - A qué datos se refiere, la corrección que haya de realizarse y el lugar en el que haya de publicarse la corrección.
 - Siempre deberá acompañar su solicitud de la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.
- 5) **Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de:**
- 1 mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
 - 2 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
 - 3 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
 - 6 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- 6) **Se entiende por información pública a los efectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno:**
- Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que no hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
 - Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
 - Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que no obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que no hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones
 - Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que no obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.



7) Respecto al acceso a la información, establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que si la información ya ha sido publicada:

- a) La resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
- b) La resolución deberá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
- c) La resolución deberá contener el texto íntegro solicitado.
- d) Ninguna es correcta.

8) De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) En virtud del principio de unidad de criterio, la Administración no puede dictar actos administrativos que se separen de la interpretación de la Ley adoptada en actos precedentes.
- b) La administración puede separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes.
- c) La Administración puede acordar el desistimiento en procedimientos iniciados de oficio sin necesidad de motivar su decisión.
- d) Cuando sea necesario adoptar un acto que se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes se someterá la decisión al superior jerárquico.

9) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las notificaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las notificaciones se practicarán obligatoriamente por medios electrónicos sin que quepa excepción a esta obligatoriedad.
- b) Los interesados en el procedimiento están obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos.
- c) Las notificaciones electrónicas se practicarán obligatoriamente a través de la dirección electrónica habilitada única.
- d) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Pùblicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, pero la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.



10) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Los actos administrativos serán inmediatamente ejecutivos salvo que conste oposición por parte del interesado, en cuyo caso, para que surtan efectos deberán ser validados en sede contencioso-administrativa.
- b) La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado.
- c) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
- d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha de su publicación.

11) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones de un acto dispondrá siempre la conversión de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
- b) La conversión de actos viciados consiste en que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de éste.
- c) Cuando el vicio del acto consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado mediante la conversión del acto viciado por parte del órgano competente para otorgar la autorización.
- d) La conversión del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

12) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) La nulidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento, aunque sean independientes del primero.
- b) La anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
- c) La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
- d) La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean dependientes del primero.



13) Un funcionario recibe orden de su superior jerárquico, titular de la unidad administrativa, de que priorice el pago de una factura que ha entrado en el registro con posterioridad a otras facturas, y con carácter previo a su tramitación, el funcionario solicita a su superior una orden motivada. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El funcionario hace lo correcto, puesto que esa orden motivada ha de constar en el expediente.
- b) El funcionario no hace lo correcto, puesto que no es necesaria esa orden motivada.
- c) Esta situación supondrá la exigencia de responsabilidad disciplinaria del funcionario por falta de la obediencia debida a su superior jerárquico.
- d) Esta situación supondrá en todo caso la exigencia de responsabilidad disciplinaria del superior jerárquico y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.

14) Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
- b) Los expedientes tendrán formato electrónico o en papel, a elección de órgano que lo incoe, y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, y notificaciones deban integrarlos. Los informes solo formarán parte del expediente cuando sean vinculantes.
- c) No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
- d) En el expediente deberá constar copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

15) Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, los poderes inscritos en el registro electrónico tendrán una validez de:

- a) Máxima de 10 años a contar desde la fecha de inscripción.
- b) Máxima de 2 años a contar desde la fecha de inscripción.
- c) Máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción.
- d) Máxima de 4 años a contar desde la fecha de inscripción.



16) Según el artículo 11 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas solo requerirán el uso de la firma:

- a) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, renunciar a derechos y desistir de acciones.
- b) Para formular recurso contencioso administrativo en nombre propio y de otra persona, así como para la ejecución de vía de hecho.
- c) Para cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo.
- d) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, renunciar a derechos y desistir de acciones. Reglamentariamente las Comunidades Autónomas podrán establecer otros supuestos.

17) Según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, la Administración no está obligada a resolver en los siguientes supuestos:

- a) Terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sujetos a prescripción.
- b) Terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
- c) No hay ninguna excepción a la obligación de resolver. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos.
- d) Terminación del procedimiento por pacto o convenio en los que renuncie a derechos subjetivos de la Administración siempre que no suponga la desaparición del objeto del procedimiento.

18) De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de los siguientes no es un sistema de provisión de puestos de trabajo:

- a) Libre designación.
- b) Expectativa de destino.
- c) Adscripción provisional.
- d) Nombramiento provisional por mejora de empleo.



19) Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, pondrán fin al procedimiento:

- a) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, la declaración formal de continuar con el procedimiento cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
- b) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
- c) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de lesividad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad jurídica de continuarlo por causas ajena a la Administración.
- d) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad formal de continuarlo por causas sobrevenidas siempre que haya sido declarada por el órgano competente para resolver y ratificada por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

20) Según el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un interesado desista de su solicitud, la Administración:

- a) Aceptará el desistimiento de plano, incluso cuando terceros interesados insten su continuación y lo declarará terminado, notificando la resolución a todos las partes personadas.
- b) Aceptará el desistimiento previa ratificación del interesado en el plazo de quince días desde que lo solicitó, notificando la resolución a todas las partes personadas cuyos intereses legítimos resulten afectados por tal desistimiento.
- c) Aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.
- d) Aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros con mejor derecho, instasen éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento.



21) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común:

- a) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
- b) Las Administraciones Públicas, en el plazo máximo de cuatro años, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
- c) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que no hayan puesto fin a la vía administrativa o que hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
- d) Las Administraciones Públicas, previa declaración de lesividad y posterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y siempre con el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.



22) Indique cuál de las siguientes fórmulas sería correcta en un pie de recurso de un acto dictado por un órgano administrativo que carece de superior jerárquico:

- a) Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su notificación. Alternativamente podrá interponerse recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación del acto impugnado.
- b) Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su notificación. Alternativamente podrá interponerse recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación del acto impugnado.
- c) Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su notificación. Una vez resuelto el recurso anterior, podrá interponerse recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación del acto impugnado.
- d) Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de alzada ante el mismo órgano que ha dictado el acto en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al de su notificación. Alternativamente podrá interponerse recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación del acto impugnado.

23) Indique cuál de los siguientes no es un contrato administrativo, según el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Un contrato de concesión de dominio público celebrado por una Administración Pública.
- b) Un contrato de concesión de servicios celebrado por una Administración Pública.
- c) Un contrato de concesión de obra celebrado por una Administración Pública.
- d) Un contrato celebrado por una Administración Pública que teniendo un objeto distinto al de los contratos administrativos típicos contemplados en el artículo 25.1 a) de la Ley 9/2017, tiene naturaleza administrativa especial por estar vinculado al giro o tráfico específico de la Administración contratante.



24) A continuación, se relacionan distintos trámites de un procedimiento de adjudicación de un contrato administrativo, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Seleccione la opción en la que los trámites están ordenados correctamente por orden temporal:

- a) Fiscalización previa de la intervención, resolución de inicio justificando la necesidad de contratar, publicación de la licitación, resolución de adjudicación, depósito de garantía definitiva, formalización del contrato y aprobación del pliego de prescripciones técnicas.
- b) Resolución del órgano de contratación iniciando el expediente y justificando la necesidad de contratar, elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, fiscalización previa de la intervención, resolución por la que se aprueba el expediente y el gasto correspondiente, y por la que se ordena el inicio del procedimiento de adjudicación, publicación del anuncio de licitación, depósito de la garantía definitiva, resolución de adjudicación y formalización del contrato.
- c) Resolución del órgano de contratación iniciando el expediente y justificando la necesidad de contratar, aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, resolución de aprobación del expediente y ordenando el inicio del procedimiento de adjudicación, resolución de adjudicación, fiscalización previa de la intervención, depósito de la garantía definitiva, formalización del contrato y publicación del anuncio de licitación.
- d) Resolución de aprobación del expediente y ordenando el inicio del procedimiento de adjudicación, fiscalización previa de la intervención, publicación de la licitación, aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, resolución de adjudicación y formalización del contrato.

25) Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Con carácter general los contratos se perfeccionan con su adjudicación.
- b) Salvo excepciones, no podrá procederse a la ejecución del contrato antes de su formalización.
- c) Si el contrato es susceptible de recurso especial no podrá efectuarse la formalización antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
- d) En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.



26) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) La prohibición de la *reformatio in peius* se refiere a la imposibilidad de modificar los contratos administrativos salvo que exista una causa de interés público que lo justifique.
- b) La prohibición de la *reformatio in peius* es una figura jurídica reconocida por la jurisprudencia, pero que no se encuentra recogida en ninguna norma legal.
- c) La prohibición de la *reformatio in peius* tiene aplicación exclusiva en la vía contencioso-administrativa.
- d) La prohibición de la *reformatio in peius* es una figura jurídica que supone que no se puede agravar la situación del interesado cuando plantea un recurso y está reconocida por la norma y la jurisprudencia.

27) De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

- a) El recurso contencioso-administrativo no será admisible contra actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.
- b) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con actos expresos y presuntos de la Administración pública.
- c) El recurso contencioso-administrativo nunca será admisible contra actos presuntos.
- d) El recurso contencioso-administrativo nunca será admisible contra actos de trámite.

28) Indique cuál de los siguientes contratos no es un contrato de suministro, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Contrato de alquiler de un barco.
- b) Contrato de adquisición de energía primaria o energía transformada.
- c) Contrato de alquiler de un inmueble.
- d) Contrato de compra de mobiliario para un despacho.



29) Indique cuál de los siguientes es un contrato excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Un contrato de arrendamiento con opción de compra de un vehículo.
- b) Un contrato de fabricación de un barco para la Administración.
- c) Un contrato por el que la Universitat compra un edificio para uso administrativo.
- d) Un contrato oneroso de concesión de obras celebrado por la Universitat.

30) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras, pero la clasificación no será exigible a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea.
- b) La clasificación es un mecanismo que tiene por objeto facilitar la acreditación de la solvencia de los empresarios para determinados tipos de contratos.
- c) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.
- d) La clasificación será exigible para determinados contratos de obras y suministros.

31) La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula: (Señalar la respuesta incorrecta)

- a) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
- b) La potestad reglamentaria.
- c) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora.
- d) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.



32) De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- b) Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. La Administración correspondiente, con carácter previo a indemnizar a los lesionados, exigirá en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- c) Los particulares reclamarán a la Administración Pública por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. La Administración correspondiente instruirá procedimiento en orden a determinar la responsabilidad de estos, y en su caso la indemnización que los mismos deberán abonar directamente a los lesionados.
- d) Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. Solo será procedente la indemnización cuando concurra dolo, o culpa o negligencia graves.

33) Según se establece en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

- a) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.
- b) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive.
- c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
- d) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.



34) Conforme establece la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:

- a) Al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales.
- b) Exclusivamente al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos.
- c) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- d) A las Cortes Generales, al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

35) Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas:

- a) Deberán notificarse a sus destinatarios.
- b) Habrán de publicarse en el diario oficial que corresponda.
- c) Habrán de publicarse necesariamente en el Boletín Oficial del Estado, al ser parte del ordenamiento jurídico.
- d) Podrán bien notificarse o bien publicarse en un diario oficial, en función de su contenido.

36) Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las potestades discretionales de la Administración están sometidas al control de legalidad de los Tribunales a través de:

- a) La determinación de la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen.
- b) La determinación del contenido discrecional de los actos anulados.
- c) El control de los elementos reglados del acto discrecional.
- d) Las potestades discretionales de la Administración no están sujetas al control de legalidad de los Tribunales.



37) De acuerdo con la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por actuación administrativa automatizada:

- a) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público.
- b) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
- c) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo sancionador y en la que haya intervenido de forma indirecta un empleado público.
- d) Cualquier acto o actuación realizada íntegra o parcialmente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público.

38) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, acerca de las encomiendas de gestión (señalar la respuesta correcta):

- a) La encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio.
- b) Es responsabilidad del órgano o Entidad encomendado dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
- c) Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.
- d) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones no será necesario su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

39) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tiene por objeto:

- a) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y del personal laboral incluidos en su ámbito de aplicación.
- b) Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- c) La ordenación y regulación de la función pública y los principios y fundamentos de actuación que ordenan la función pública estatal.
- d) Determinar las normas aplicables al empleado público al servicio de las Administraciones Públicas.



40) De acuerdo con el art. 48.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad:

- a) El empleado público tendrá un permiso de cinco días hábiles.
- b) El empleado público tendrá un permiso de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
- c) El funcionario público tendrá un permiso de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
- d) El funcionario público tendrá un permiso de tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad.

41) De acuerdo con el art. 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los siguientes principios (señalar la respuesta correcta):

- a) Igualdad, mérito y capacidad.
- b) Mérito y capacidad.
- c) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- d) Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

42) A los efectos de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, la función pública valenciana está constituida:

- a) Por el conjunto de personas que tienen una relación jurídica regulada por el derecho administrativo o laboral, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente o temporal.
- b) Por el conjunto de personas que prestan servicios retribuidos en la misma mediante una relación regulada por la normativa administrativa y subsidiariamente por la normativa laboral.
- c) Por el conjunto de personas que prestan servicios retribuidos en la misma mediante una relación regulada por la normativa administrativa o laboral.
- d) Por el conjunto de personas que tienen una relación jurídica regulada por el derecho administrativo y/o laboral, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter preferentemente permanente, o en su caso, temporal.



43) De acuerdo con el ámbito subjetivo de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, es cierto que:

- a) La presente ley se aplica en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, en relación exclusivamente con su profesorado docente e investigador funcionario, en todo lo que no esté expresamente regulado por la legislación orgánica de universidades y sus disposiciones de desarrollo.
- b) La presente ley se aplica en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, en relación exclusivamente con su profesorado docente e investigador, por la legislación orgánica de universidades y sus disposiciones de desarrollo.
- c) La presente ley se aplica al personal docente e investigador de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, solo se aplicarán directamente las disposiciones de esta ley, cuando así lo disponga su legislación específica.
- d) La presente ley se aplica al personal docente e investigador de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, se regirá por su legislación específica y, en lo no dispuesto en ella, por la presente ley y demás legislación general aplicable según el tipo de personal.

44) Según establece el art. 53 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, elaboraran un plan estratégico de recursos humanos, atendiendo a las siguientes circunstancias:

- a) Las universidades públicas valencianas tendrán que elaborar un plan estratégico de recursos humanos quinquenalmente, siempre que preste servicio un número de personal empleado público igual o superior a docientos cincuenta y en relación exclusivamente con su personal de administración y servicios.
- b) Las universidades públicas valencianas tendrán que elaborar un plan estratégico de recursos humanos cuatrienalmente, siempre que preste servicio un número de personal empleado público igual o superior a cincuenta y en relación a todo su personal.
- c) Las universidades públicas valencianas tendrán que elaborar un plan estratégico de recursos humanos quinquenalmente, siempre que preste servicio un número de personal empleado público igual o superior a docientos cincuenta y en relación a todo su personal.
- d) Las universidades públicas valencianas tendrán que elaborar un plan estratégico de recursos humanos cuatrienalmente, siempre que preste servicio un número de personal empleado público igual o superior a cincuenta y en relación exclusivamente con su personal de administración y servicios.



45) Segundo el art. 32 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, es cierto que:

- a) Los cuerpos de la Administración de la Generalitat se agrupan en los sectores funcionariales de administración general y administración especial, siendo los generales los que habilitan para desempeñar puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones comunes en el ejercicio de la actividad administrativa, incluidas las de gestión, inspección, asesoramiento, control, ejecución y otras similares, relacionadas con aquella.
- b) Los cuerpos de la Administración de la Generalitat se agrupan en los sectores funcionariales de administración general y administración especial, siendo los generales los que habilitan para desempeñar puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones comunes en el ejercicio de la actividad administrativa, excluidas las de gestión, inspección, asesoramiento, control, ejecución y otras similares, relacionadas con aquella.
- c) Los cuerpos de la Administración de la Generalitat se agrupan en cuerpos generales y cuerpos especiales, siendo los generales los que habilitan para desempeñar puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones comunes en el ejercicio de la actividad administrativa, incluidas las de gestión, inspección, asesoramiento, control, ejecución y otras similares, relacionadas con aquella.
- d) Los cuerpos de la Administración de la Generalitat se agrupan en cuerpos generales y cuerpos especiales, siendo los generales los que habilitan para desempeñar puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones comunes en el ejercicio de la actividad administrativa, incluidas las de gestión, control y ejecución y excluidas las de inspección, asesoramiento, y otras similares, relacionadas con aquella.

46) Conforme al art. 27 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, que regula el régimen jurídico aplicable al personal directivo público profesional, es cierto que:

- a) El personal funcionario de carrera que desempeñe puestos que integran la Dirección Pública Profesional formalizará su relación de servicios mediante el correspondiente nombramiento y se pasará a la situación administrativa de servicios especiales en su puesto de origen.
- b) El personal funcionario de carrera que desempeñe puestos que integran la Dirección Pública Profesional formalizará su relación de servicios mediante el correspondiente nombramiento y se pasará a la situación administrativa de servicios en otra administración pública respecto de su puesto de origen.
- c) El personal funcionario de carrera que desempeñe puestos que integran la Dirección Pública Profesional formalizará su relación de servicios mediante el correspondiente nombramiento y pasará a la situación administrativa de excedencia automática por prestar servicios en el sector público.
- d) El personal funcionario de carrera que desempeñe puestos que integran la Dirección Pública Profesional formalizará su relación de servicios mediante el correspondiente nombramiento y se mantendrá en situación de servicio activo.



47) El art. 64 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, establece:

- a) En todas las convocatorias para la de selección personal se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional, de modo que progresivamente se alcance el tres por ciento de los efectivos totales en cada administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública.
- b) En todas las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional, de modo que progresivamente se alcance el tres por ciento de los efectivos totales en cada administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública.
- c) En las convocatorias para la selección de personal se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional, de modo que progresivamente se alcance el cinco por ciento de los efectivos totales en cada administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública.
- d) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional, de modo que progresivamente se alcance el cinco por ciento de los efectivos totales en cada administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública.

48) Conforme al art. 82.2 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, es cierto que cuando las situaciones de incapacidad temporal, permiso por parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, permiso de paternidad, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo, impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreveniera una de dichas situaciones:

- a) Este periodo se podrá disfrutar, aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
- b) Este periodo se podrá disfrutar, aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de doce meses a partir del final del año en que se hayan originado.
- c) Este periodo se podrá disfrutar, cuando no haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
- d) Este periodo se podrá disfrutar, aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses del hecho causante.



49) Conforme al art. 114 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, es cierto, que con carácter general:

- a) El personal funcionario que obtenga un puesto de trabajo por concurso no podrá desempeñar provisionalmente en comisión de servicios otro puesto de trabajo hasta que transcurra un año de permanencia en el mismo.
- b) El personal funcionario deberá permanecer un mínimo de un año en el puesto de trabajo obtenido con destino definitivo para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo.
- c) Cuando el puesto de trabajo obtenido con destino definitivo esté adscrito a una agrupación de puestos de trabajo, deberá permanecer un mínimo de cuatro años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo adscritos al cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial, de la citada agrupación de puestos de trabajo.
- d) La adjudicación de un puesto de trabajo clasificado para su provisión por más de un cuerpo o escala, conlleva la integración del personal funcionario en otros cuerpos o escalas distintos al que pertenezca.

50) Conforme a la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal funcionario de carrera de una administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública, que obtenga destino en otra distinta a través de los procedimientos de movilidad, quedará respecto de su administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública de origen:

- a) Excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público.
- b) Servicio en otras administraciones públicas.
- c) Excedencia voluntaria por interés particular.
- d) Comisión de servicios ordinaria.

51) En la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se considerarán como daños derivados del trabajo:

- a) Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
- b) Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- c) Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
- d) Enfermedades profesionales y riesgos no laborales.



52) De acuerdo con el art. 78 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, las Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores, es falso que:

- a) Deberán realizar, en el primer año de contrato, un curso de formación docente inicial cuyas características serán establecidas por las universidades, de acuerdo con sus unidades responsables de la formación e innovación docente del profesorado.
- b) Las Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores desarrollarán tareas docentes hasta un máximo de 180 horas lectivas por curso académico, de forma que la actividad docente resulte compatible con el desarrollo de tareas de investigación para atender a los requerimientos para su futura acreditación.
- c) Transcurridos los dos primeros años del contrato, la universidad realizará una evaluación orientativa del desempeño de las Profesoras y los Profesores Ayudantes Doctores, que podrá encargarse a las agencias de calidad competentes.
- d) Cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, podrá alcanzar una duración máxima de ocho años teniendo en cuenta su finalidad y el grado de las limitaciones en la actividad.

53) De acuerdo con el art. 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el marco de la planificación asistencial y docente de las Administraciones Públicas, el régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias podrá establecer la vinculación de determinadas plazas asistenciales y de salud pública de la institución sanitaria:

- a) Con plazas docentes de los cuerpos de profesores de universidad y con plazas de profesor permanente laboral.
- b) Con cualquiera de las modalidades de profesorado universitario.
- c) Con plazas docentes de los cuerpos de profesores de universidad, con plazas de profesor permanente laboral y profesor asociado.
- d) Con plazas docentes de los cuerpos de profesores de universidad.



54) Según los Estatutos de la Universitat de València y de acuerdo con el art. 157 regulador de la Comisión de Profesorado, es falso que:

- a) La Comisión de Profesorado tiene carácter consultivo y asesor del Consejo de Gobierno.
- b) Es función de la Comisión de Profesorado además de las previstas en estos Estatutos, la elaboración y aprobación de su reglamento de régimen interno y aquellas que le puedan ser encargadas por el rector o la rectora o por el Consejo de Gobierno.
- c) Su reglamento deberá garantizar la presencia mayoritaria del personal docente e investigador a tiempo completo, así como una representación del personal investigador en formación, de estudiantes y de personal de administración y servicios.
- d) A sus sesiones asisten con voz y sin voto los presidentes o las presidentas de la Junta de Personal Docente e Investigador y del Comité de Empresa.

55) De acuerdo con Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, respecto a la regulación que hace del contrato predoctoral, es cierto que:

- a) La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 65 por 100 durante el tercer año del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación.
- b) A la finalización del contrato por expiración del tiempo convenido, la persona trabajadora no tendrá derecho a recibir una indemnización.
- c) El contrato tendrá por objeto la orientación postdoctoral por un período máximo de doce meses.
- d) El contrato se formalizará por quienes estén en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado Universitario con Grado de al menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer System) o Máster Universitario, o equivalente, y hayan sido admitidos o estén en condición de ser admitidos en un programa de doctorado.

56) El Comité de Seguridad y Salud según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, estará formado por:

- a) Los trabajadores y el empresario.
- b) Los delegados de prevención, de una parte, y los delegados sindicales en número igual, de la otra.
- c) Los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención, de la otra.
- d) Los delegados de prevención, de una parte, y los representantes del empresario en menor proporción, de la otra.



57) Señale la respuesta correcta de acuerdo con el art. 2 del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana:

- a) El personal investigador está excluido de su ámbito de aplicación.
- b) Las normas contenidas en el presente Convenio serán de aplicación a todo el Personal Laboral que preste servicios retribuidos en las Universidades Públicas, por lo que todo el personal investigador, incluido el investigador distinguido y el profesor distinguido se encuentran en el ámbito de aplicación del mencionado Convenio.
- c) El profesorado distinguido y el personal investigador distinguido cuya contratación se regula en la Ley Orgánica del Sistema Universitario y en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, respectivamente, está excluido de su ámbito de aplicación.
- d) Tanto al personal investigador como al investigador distinguido, en las materias reguladas de forma específica en convocatorias o programas propios de contratos laborales personal de investigación prevalecerán en su caso sobre lo establecido en el presente convenio.

58) Según la regulación establecida en el Título IV, “Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión”, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es falso que:

- a) Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de este Estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
- b) Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, los criterios generales sobre ofertas de empleo público, entre otros.
- c) Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.
- d) Queda excluida de la obligatoriedad de la negociación, la regulación y determinación general, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.



59) Según el art. 40 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funciones de los órganos de representación:

- a) Recibir información de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.
- b) Emitir informe sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.
- c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves.
- d) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

60) De acuerdo con la regulación que hace el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referente a la solución extrajudicial de los conflictos, es cierto que:

- a) El arbitraje será obligatorio cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el arbitro o árbitros podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas.
- b) Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma.
- c) Mediante el procedimiento de mediación las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma.
- d) Mediante el procedimiento de arbitraje y mediación las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma.



61) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, respecto del plan de prevención de riesgos laborales, establece que el empresario:

- a) Podrá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.
- b) Podrá realizar una evaluación final de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.
- c) Deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.
- d) Deberá realizar una evaluación final de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.

62) Según establece la Disposición adicional quincuagésima segunda del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social.

- a) La realización por el estudiantado de las universidades de prácticas, exclusivamente si estas son remuneradas y dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado y máster.
- b) La realización por el estudiantado de las universidades de prácticas, exclusivamente si estas son remuneradas y dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado.
- c) Únicamente la realización de estancias predoctorales de investigación.
- d) La realización por el estudiantado de las universidades de prácticas, tanto las dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado y máster, doctorado, como las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto.

63) Según la Ley Orgánica 3/2007, las Administraciones públicas integrarán, de forma activa, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres:

- a) En la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas.
- b) En la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos.
- c) En el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
- d) Todas son correctas.



64) Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado:

- a) Constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria.
- b) No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria.
- c) No constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria.
- d) Constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria.

65) Según la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto al acoso sexual y acoso por razón de sexo, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- b) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- c) El acoso sexual y el acoso por razón de sexo solo se considerarán discriminatorios cuando así lo determine un juez.
- d) El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

66) Según el artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el otorgamiento de una subvención debe cumplir el siguiente requisito:

- a) La aprobación del gasto por el órgano consultivo para ello.
- b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención.
- c) La fiscalización posterior de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en las leyes.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.



67) De conformidad con el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se establece que:

- a) En todo caso, la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros.
- b) La concesión de subvenciones de cuantía superior a 10 millones de euros requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
- c) En todo caso, la concesión de subvenciones de cuantía superior a 10 millones de euros requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros.
- d) La concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

68) Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

- a) El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia de oficio o a solicitud del interesado.
- b) Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, aunque los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante.
- c) La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria.
- d) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, en ningún caso.

69) Señala la afirmación falsa, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la Hacienda Pública de la Generalitat está constituida por los derechos siguientes:

- a) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- b) Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- c) Sus precios públicos.
- d) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.



70) Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

- a) Las obligaciones económicas de la Hacienda Pública de la Generalitat nacen de los reglamentos, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen.
- b) Las obligaciones de la Hacienda Pública de la Generalitat solo son exigibles cuando resulten de la ejecución de su presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.
- c) Los tribunales y autoridades administrativas podrán despachar mandamiento de ejecución o dictar providencia de embargo contra los bienes o derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio o función pública.
- d) Si la administración no pagara al acreedor de la hacienda pública de la Generalitat dentro de los seis meses siguientes al día del reconocimiento de la obligación o de notificación de la resolución judicial, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 16 de esta ley sobre la cantidad debida desde que la persona física o jurídica acreedora, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.

71) Señala la respuesta incorrecta, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. La programación plurianual deberá incluir los siguientes ejes de financiación, que se sustentarán en indicadores específicos de evaluación, acordados, medibles y contrastables que son:

- a) Financiación estructural basal.
- b) Financiación estructural por necesidades singulares.
- c) Financiación por proyectos de investigación.
- d) Financiación por objetivos.



72) Señala la respuesta correcta, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

- a) La estructura del presupuesto de las universidades, su sistema contable y los documentos que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se establezcan para el sector privado.
- b) Al estado de ingresos se acompañará la relación de puestos de trabajo de todo el personal universitario.
- c) Las universidades dedicarán un porcentaje de su presupuesto no inferior al 10 por ciento a programas propios de investigación.
- d) La falta de remisión de la liquidación del presupuesto, o la falta de adopción de medidas en caso de liquidación con remanente negativo, facultará a la Comunidad Autónoma para adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la universidad.

73) Segundo el tenor literal del artículo 206.1 de los Estatutos de la Universitat de València, se establece expresamente:

- a) El patrimonio de la Universitat de València está constituido por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de contenido económico de los que es titular, y de todos aquellos que pueda recibir en el futuro, procedentes de personas o entidades públicas o privadas.
- b) El patrimonio de la Universitat de València está constituido por el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular, y de todos aquellos que pueda recibir en el futuro, procedentes entidades públicas.
- c) El patrimonio de la Universitat de València está constituido por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de contenido económico de los que es titular, y de todos aquellos que pueda recibir en el futuro, procedentes de entidades públicas.
- d) El patrimonio de la Universitat de València está constituido por el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular, y de todos aquellos que pueda recibir en el futuro, procedentes de personas o entidades públicas o privadas.



74) Los Estatutos de la Universitat de València establecen expresamente:

- a) Corresponde al Consejo Social, con la aprobación del Consejo de Gobierno, adoptar las resoluciones que se refieren a la disponibilidad de los bienes inmuebles y de los bienes muebles de extraordinario valor.
- b) Corresponde al Consejo de Gobierno, con la aprobación del Consejo Social, adoptar las resoluciones que se refieren a la disponibilidad de los bienes inmuebles y de los bienes muebles de extraordinario valor.
- c) Corresponde al Rector o la Rectora, con la aprobación del Consejo de Gobierno, adoptar las resoluciones que se refieren a la disponibilidad de los bienes inmuebles y de los bienes muebles de extraordinario valor.
- d) Corresponde al Rector o la Rectora, con la aprobación del Consejo Social, adoptar las resoluciones que se refieren a la disponibilidad de los bienes inmuebles y de los bienes muebles de extraordinario valor.

75) Los Estatutos de la Universitat de València establecen expresamente, que el presupuesto de ingresos debe contener el detalle de los recursos de la Universitat de València para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con el desglose siguiente:

- a) Transferencias, precios públicos, tasas y derechos, los remanentes de tesorería y las compensaciones por las exenciones y deducciones en materia de precios públicos y otros derechos.
- b) Transferencias, precios públicos, tasas y derechos, rentas por actividades universitarias y los remanentes de tesorería.
- c) Transferencias, rentas por actividades universitarias, los remanentes de tesorería y las compensaciones por las exenciones y deducciones en materia de precios públicos y otros derechos.
- d) Transferencias, precios públicos, tasas y derechos, rentas por actividades universitarias, los remanentes de tesorería y las compensaciones por las exenciones y deducciones en materia de precios públicos y otros derechos.



76) Los Estatutos de la Universitat de València establecen expresamente que requerirán la autorización del rector o la rectora los contratos que:

- a) Prevean la contratación de personal no vinculado funcional o laboralmente con la Universitat.
- b) Tengan como contratantes, por parte de la Universitat, a más de tres departamento o instituto universitario de investigación o personal docente e investigador adscrito a más de un departamento o instituto.
- c) Tengan una cuantía que supere la suma de 50.000 euros. Esta cifra la modificará anualmente el Consejo de Gobierno con arreglo a las variaciones del IPC.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

77) De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ejecución Presupuestaria de 2024 de la Universitat de València:

- a) Los ingresos de la Universidad están destinados a satisfacer de forma global el conjunto de gastos, sin que ningún recurso pueda quedar afectado a una finalidad determinada.
- b) No se podrán adquirir compromisos de gastos ni contraer obligaciones por una cuantía superior al importe de los créditos consignados en el estado de gastos, de forma que los actos administrativos y las disposiciones generales que infringen esta norma serán anulables.
- c) Los gastos de personal tienen una vinculación por artículo y programa presupuestario.
- d) La contabilización de los gastos tendrá que realizarse necesariamente con vinculación por concepto, orgánica y programa presupuestario.

78) De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ejecución Presupuestaria de 2024 de la Universitat de València:

- a) La autorización del gasto (fase A) es la operación contable que refleja el acto en virtud del cual el órgano competente acuerda o concierta con un tercero, -según los casos, y después de cumplir los trámites que procedan según la normativa vigente-, la realización de obras, prestaciones de servicios, etc., previamente autorizados.
- b) La disposición o el compromiso de gasto (fase D) es el acto en virtud del cual el órgano competente acuerda la realización de un gasto, calculada de manera cierta o aproximada.
- c) El reconocimiento de la obligación se efectúa antes de firmar la liquidación de haberes y con anterioridad a recibir la factura o la certificación correspondiente con todos los requisitos legales, conformada por la persona responsable de la petición del bien o la prestación del servicio.
- d) La propuesta de pago (fase K) es la operación contable por la cual, una vez reconocida la obligación de pago a favor de un tercero, se propone al órgano competente que ordene el pago.



79) En el artículo 23 del Reglamento de Ejecución Presupuestaria de 2024 de la Universitat de València, se establece que, en cuanto al seguimiento y control contable, cada uno de los gastos que se ejecutan se tienen que codificar de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Codificación por programas, codificación presupuestaria por conceptos, codificación orgánica y codificación patrimonial.
- b) Codificación por programas, codificación presupuestaria por subconceptos, codificación orgánica y codificación patrimonial.
- c) Codificación por programas, codificación presupuestaria por conceptos y codificación orgánica.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

80) La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario consagra la autonomía universitaria, que:

- a) Es un derecho fundamental reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución Española.
- b) Comprende la determinación de su organización y estructuras, incluida la creación de organismos y entidades que actúen como apoyo para sus actividades.
- c) Sólo gozan de la misma las universidades públicas.
- d) Son correctas a) y b).

81) De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ejecución Presupuestaria de 2024 de la Universitat de València:

- a) Son objeto de control interno todos los actos, los documentos y los expedientes de la Universitat de València de los cuales puedan derivar derechos y obligaciones de contenido económico o mercantil, de fondo o valores, de acuerdo con los principios legales aplicables y con aquello que dispone este Reglamento.
- b) En el ámbito de la contratación menor se podrá acordar un control posterior del gasto de carácter vinculante, a excepción de los gastos menores definidos en el artículo 31.6.
- c) El control previo se ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control, de conformidad con lo que establece el Reglamento de Régimen Interno de la Oficina de Control Interno y las normas de auditoría que resultan aplicables en la labor de control financiero.
- d) La Oficina de Control Interno dará cuenta al Gerente o la Gerente de los resultados más importantes del control realizado con posterioridad y, si procede, propondrá las actuaciones que resulten aconsejables para asegurar que la administración de los recursos de la Universidad se ajusten a las disposiciones aplicables en cada caso.



82) A efectos de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, se entiende por sistema universitario:

- a) El conjunto de universidades públicas y de las estructuras que les sirven para el desarrollo de sus funciones.
- b) El conjunto de instituciones, públicas o privadas, que desarrollan las funciones centrales de docencia, investigación y transferencia e intercambio del conocimiento y que ofertan títulos universitarios oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado.
- c) El conjunto de universidades, públicas y privadas, y de los centros y estructuras que les sirven para el desarrollo de sus funciones.
- d) Las Administraciones Públicas que coordinan a las instituciones universitarias.

83) La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, establece que los Estatutos de las Universidades Públicas:

- a) Serán aprobados por el Congreso previo informe favorable de Consejo de Universidades del Estado y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
- b) Serán aprobados por la Comunidad Autónoma que corresponda y se publicarán únicamente en el diario oficial de Comunidad Autónoma.
- c) Serán aprobados por la Comunidad Autónoma que corresponda y se publicarán en el diario oficial de Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial del Estado.
- d) Son aprobados por Resolución del Rector o Rectora y se publicarán únicamente en el diario oficial de Comunidad Autónoma.

84) Según la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario:

- a) Las resoluciones del Rector o Rectora no ponen fin a la vía administrativa y son susceptibles de recurso de alzada ante el Claustro.
- b) Las resoluciones del Rector o Rectora no ponen fin a la vía administrativa y son susceptibles de recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno.
- c) Las resoluciones del Rector o Rectora ponen fin a la vía administrativa y son susceptibles de recurso potestativo de reposición, sin perjuicio de la posibilidad de impugnación directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- d) Las resoluciones del Rector o Rectora no ponen fin a la vía administrativa excepto cuando se trate de la resolución de un recurso previo.



85) Segundo el Real Decreto 984/2022, de 22 de noviembre, por el que se establecen las Oficinas de Transferencia de Conocimiento y se crea su Registro, las causas que conllevarán la pérdida del reconocimiento como Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) y la cancelación de la inscripción en el Registro son:

- a) Transcurso del plazo de 10 años establecido en el Decreto.
- b) La pérdida de alguno de los requisitos exigibles para su inscripción, previstos en el artículo 6 y el incumplimiento por parte de la OTC de las obligaciones previstas en este real decreto.
- c) Transcurso del plazo de 6 años establecido en el Decreto.
- d) El reconocimiento a la OTC de una distinción por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación para destacar su labor y eficiencia.

86) Segundo la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, corresponden al Consejo Social las siguientes funciones:

- a) Aprobar la oferta de titulaciones oficiales y de formación permanente, así como la creación y supresión de centros propios y en el extranjero.
- b) Aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia del estudiantado en la universidad.
- c) Promover acciones para facilitar la conexión de la universidad con la sociedad y para el fortalecimiento de las actividades de formación a lo largo de la vida que desarrollan las universidades.
- d) Proponer al Consejo de Gobierno, el Plan Plurianual de Financiación de la universidad y realizar su seguimiento, para su aprobación.

87) Segundo el art. 92 de los Estatutos de la Universitat de València quién aprueba el reglamento de funcionamiento del Consejo de Gobierno es:

- a) El rector o la rectora, a propuesta del Consejo de Gobierno.
- b) El Consejo Social, a propuesta del Claustro.
- c) El Consejo Social y el Claustro, a propuesta del rector o la rectora
- d) El Claustro, a propuesta del Consejo de Gobierno.



88) Según el art. 117 de los Estatutos de la Universitat de València, la comunidad universitaria se integra en el Consejo Social mediante una representación del Consejo de Gobierno de la que forman parte:

- a) El rector o la rectora, el secretario o la secretaria general, el gerente o la gerenta y un conjunto de miembros del Consejo de Gobierno en el número que fije la ley, elegidos por mayoría absoluta de entre los miembros del mismo pertenecientes al colectivo del personal docente e investigador.
- b) El rector o la rectora, el secretario o la secretaria general y el gerente o la gerenta.
- c) El rector o la rectora y un conjunto de miembros del Consejo de Gobierno en el número que fije la ley, elegidos por mayoría absoluta asegurando la presencia de miembros del personal docente e investigador, de los y las estudiantes y del personal de administración y servicios.
- d) El rector o la rectora, el secretario o la secretaria general, el gerente o la gerenta y un conjunto de miembros del Consejo de Gobierno en el número que fije la ley, elegidos por mayoría absoluta asegurando la presencia de miembros del personal docente e investigador, de los y las estudiantes y del personal de administración y servicios.

89) Según el art. 16 de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, el Consejo Social dispondrá de una Secretaría al frente de la cual estará el Secretario o la Secretaria del Consejo Social, que:

- a) Será nombrado y separado por los Rectores o Rectoras de las universidades a propuesta del Presidente o la Presidenta del Consejo. La designación recaerá en persona que no sea Vocal del Consejo Social, y actuará con voz, pero sin voto.
- b) Será nombrado y separado por los Rectores o Rectoras de las universidades a propuesta del Consejo de Gobierno. La designación recaerá en persona que no sea Vocal del Consejo Social, y actuará con voz, pero sin voto.
- c) Será nombrado y separado por la persona que ostente la titularidad de la Conselleria competente en materia de universidades, a propuesta del Presidente o la Presidenta del Consejo. La designación recaerá en persona que sea Vocal del Consejo Social, y actuará con voz y voto.
- d) Será nombrado y separado por la persona que ostente la titularidad de la Conselleria competente en materia de universidades, a propuesta del Presidente o la Presidenta del Consejo. La designación recaerá en persona que no sea Vocal del Consejo Social, y actuará con voz, pero sin voto.



90) Según la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario corresponde al Gobierno regular, al respecto de la convalidación o adaptación de estudios, homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros, validación de experiencia y reconocimiento de créditos, (señalar la opción incorrecta)

- a) Las condiciones para la declaración de equivalencia de un título oficial extranjero de educación superior en relación con el nivel académico universitario oficial de Grado.
- b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de un título oficial extranjero de educación superior en relación con el nivel académico universitario oficial de Máster Universitario.
- c) Las condiciones para la declaración de equivalencia de un título oficial extranjero de educación superior en relación con el nivel académico universitario oficial de Doctor.
- d) Las condiciones para el reconocimiento académico de la experiencia laboral o profesional, así como la formación a lo largo de la vida

91) Según los Estatutos de la Universitat de València, no está dentro de las competencias del Consejo de Gobierno:

- a) Aprobar planes propios de promoción y desarrollo de la investigación y de formación de investigadores, así como de innovación educativa.
- b) Aprobar la supresión de los servicios generales.
- c) Establecer los criterios generales para la configuración y la actualización de la plantilla del personal docente e investigador y de administración y servicios.
- d) Aprobar las bases especiales de los conciertos singulares de la Universitat con las instituciones sanitarias en las que deban impartirse enseñanzas universitarias.

92) Según el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, dentro de los estudios universitarios propios, la formación permanente estará conformada por: (señale la opción incorrecta)

- a) El Máster de Formación Permanente con una carga que podrá tener 60, 90 y 120 créditos ECST.
- b) El Diploma de Especialización con entre 30 y 59 créditos.
- c) El Diploma de Experto de menos de 30 créditos.
- d) Los Diplomas de Estudios de Avanzados de 15 ECTS.



93) En relación con la participación del personal de instituciones sanitarias concertadas con la Universitat de València que ejerza funciones como profesor o profesora asociado de acuerdo con la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y las disposiciones que la desarrollan en los órganos de gobierno y representación: (señale de las siguientes afirmaciones la incorrecta).

- a) En los Consejos de Departamento, habrá una presencia equivalente al 10% del número de miembros del personal docente e investigador, según el procedimiento que determine el Reglamento electoral general.
- b) En las Juntas de Centro, habrá una presencia equivalente al 15% del número de representantes del personal docente e investigador no permanente, y según el procedimiento que determine el Reglamento electoral general.
- c) En el Consejo de Gobierno, habrá una presencia equivalente al 5% del número de representantes del personal docente e investigador del centro correspondiente, y según el procedimiento que determine el Reglamento electoral general.
- d) En el Claustro, habrá una presencia equivalente al 10% del número de representantes del personal docente e investigador del centro correspondiente, y según el procedimiento que determine el Reglamento electoral general.

94) Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la creación, modificación y supresión de Facultades y Escuelas:

- a) Serán acordadas por el Gobierno, a iniciativa de la universidad mediante propuesta y aprobación de su Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comunidad Autónoma.
- b) Serán acordadas por la Comunidad Autónoma, a iniciativa de la universidad mediante propuesta y aprobación de su Consejo de Gobierno.
- c) Serán acordadas por el Gobierno, a iniciativa de la universidad mediante propuesta y aprobación de su Consejo de Gobierno, previo informe favorable del Consejo de Universidades.
- d) Serán acordadas por la Comunidad Autónoma a iniciativa de la universidad mediante propuesta y aprobación de su Consejo Social, previo informe favorable del Consejo de Gobierno.



95) Según lo dispuesto en los Estatutos de la Universitat de Valencia, en qué caso de los que se indican a continuación podrá crearse un departamento en la Universitat de València por segregación de uno ya existente:

- a) Cuando un departamento esté constituido por más de un área de conocimiento y el número de miembros del personal docente e investigador adscritos a una de ellas supere el mínimo de 36.
- b) Cuando un departamento esté constituido por una única área de conocimiento y el número de miembros del personal docente e investigador adscritos al mismo sea superior a 50.
- c) Cuando un departamento imparta docencia en centros o agrupaciones de centros alejados geográficamente, podrá segregarse en tantos departamentos como centros en los que imparta docencia.
- d) Cuando un departamento esté constituido por más de dos áreas de conocimiento y el número de miembros del personal docente e investigador adscritos a cada una de ellas una de ellas supere el mínimo de 18.

96) Según lo dispuesto en los Estatutos de la Universitat de Valencia, indique el enunciado falso sobre la modificación de los institutos universitarios:

- a) La modificación de un instituto adscrito se realizará con arreglo a lo previsto en el convenio de adscripción.
- b) La modificación de un instituto interuniversitario se realizará con arreglo a lo previsto en su reglamento de régimen interno, y sin perjuicio de la competencia del Consejo Social.
- c) La modificación de un instituto mixto o concertado se realizará con arreglo a lo previsto en el convenio de creación.
- d) La modificación de un instituto universitario de investigación propio se realizará por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Instituto.

97) En el procedimiento para la modificación de los planes de estudios impartidos en centros universitarios, según el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, serán consideradas como modificaciones no sustanciales:

- a) Aquellas que no supongan un cambio en la naturaleza, objetivos y características fundamentales del título inscrito.
- b) La modificación o supresión de Universidades participantes en los casos de estudios interuniversitarios.
- c) Las que supongan un cambio en la modalidad de impartición.
- d) Cuando la modificación consista en la incorporación o cambio en los complementos de formación.



98) En relación con la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de Convivencia Universitaria, indique cuál de las siguientes no sería una falta como graves:

- a) Realizar novatadas o cualesquiera otras conductas o actuaciones vejatorias, física o psicológicamente, que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas.
- b) Apoderarse indebidamente del contenido de pruebas, exámenes o controles de conocimiento.
- c) Incumplir las normas de seguridad y salud establecidas por los centros universitarios y sus instalaciones y servicios.
- d) Acceder sin la debida autorización a los sistemas informáticos de la universidad.

99) Según establece el art. 20 del R.D. 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales:

- a) Los títulos universitarios oficiales, expedidos de conformidad con lo previsto en este real decreto, surtirán efectos plenos desde la fecha de la completa finalización de los estudios correspondientes a su obtención.
- b) Los títulos universitarios oficiales, expedidos de conformidad con lo previsto en este real decreto, surtirán efectos plenos desde la fecha del pago de la tasa de expedición del título,
- c) Los títulos universitarios oficiales, expedidos de conformidad con lo previsto en este real decreto, surtirán efectos plenos desde la fecha de su inscripción en el Registro Universitario Oficial de Títulos
- d) Los títulos universitarios oficiales, expedidos de conformidad con lo previsto en este real decreto, surtirán efectos plenos desde la fecha de expedición del título.

100) Segundo el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, respecto del Máster de Formación Permanente se establece que:

- a) No podrá ser inscrito en el RUCT (Registro Universitario de Centros y Títulos)
- b) Las universidades, en el ejercicio de su autonomía, podrán utilizar otras denominaciones
- c) Podrá ser impartido por institutos de investigación.
- d) Podrá tener una carga lectiva máxima de 180 créditos ECTS